

Imprimir

Un año del gobierno de la potencia mundial de la vida, liderado por el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, arriba a su primer año de un gobierno progresista, en medio de la feroz oposición de un establecimiento que se niega a renunciar a los privilegios de haber gobernado el país por muchos años, esos gobiernos que han estado al servicio primordial de los poderosos, que controlan gran parte del Estado, con órganos de control como la fiscalía, procuraduría, los partidos políticos tradicionales, las cortes y hoy con los medios de comunicación de propiedad de los grupos económicos, quienes lideran la oposición principalmente con las noticias falsas y sus campañas de desinformación; todos ellos niegan la posibilidad de aprobar las reformas de cambios estructurales que favorezcan a quienes no han tenido gobierno, la inmensa mayoría de los colombianos.

Es reconocido el manejo responsable que el gobierno hace de la economía por organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI, entre otros organismos multilaterales; las relaciones internacionales con una diplomacia audaz que le ha permitido erigirse como un gobierno líder en el mundo en la defensa de las energías limpias y renovables y la lucha contra la crisis climática; la persecución al narcotráfico afectando sus finanzas con el decomiso de cocaína con indicadores que en este corto tiempo, superan con creces a gobiernos anteriores, la lucha frontal contra la corrupción que deja al desnudo hechos tan protuberantes, como los dineros que se roban las Eps, La Sae, la Unp, los recursos de la paz, los dineros hurtados en los ministerios como el de las Tic, quitándoles el acceso al internet de los niños o los 70 mil millones en el ministerio de minas y últimamente el robo del petróleo por “prestantes empresarios de bien”, que se alzan con más de 80 millones de dólares de los recursos públicos de los colombianos, que el gobierno recientemente ha denunciado.

Enfrentar la criminalidad con el conflicto más execrable del mundo con el accionar de las organizaciones del multicitrimen, el ELN, las Disidencias, asumiendo el reto de buscar una paz total, quitándole “el agua a pez o con la asfixia democrática”, acudiendo al empoderamiento del pueblo y la sociedad civil en la construcción de la paz y la reconciliación que es sin lugar a dudas una de las mayores apuestas para ponerle fin a un conflicto que es el freno para un mejor bienestar y progreso de la nación.

El presidente Gustavo Petro señala con la fuerza del argumento, que devolviéndole el gobierno y el Estado al constituyente primario, no habría justificación para el alzamiento armado, más cuando las guerrillas no se diferencian en mucho con el actuar de las organizaciones del multictipen, quienes alimentadas con el combustible del narcotráfico somete al país a la mayor criminalidad, las alianzas demostradas entre ellos y con agentes del Estado cooptados y a su servicio y que hace inviable la nación, la que han querido llevarla a un Estado fallido.

Hoy el país interpela y les exige al ELN y las Disidencias, a que reciban la mano generosa del gobierno del cambio y dejen su accionar violento y de afectación primordialmente a la sociedad civil, porque las mismas ya no combaten a la fuerza pública, quien con su profesionalismo y experticia les ha asestado una derrota política y militar estratégica, su discurso en desuso con el devenir de la historia, no puede ser el freno para las transformaciones que por la vía democrática requiere el país, como lo demostró el triunfo del gobierno del cambio, hoy es el momento para que se sintonicen con los cambios y las reformas sociales, que colocarían al país en el sendero de brindar mayores posibilidades de desarrollo democrático de equidad con justicia social para el conjunto de la nación entera.

Los mayores niveles de criminalidad los provocan las organizaciones del multictipen, el desplazamiento y confinamiento, las masacres, el asesinato sistemático de los líderes sociales y los firmantes de la paz, la seguridad ciudadana, la extorsión, el sicariato, el gota a gota, el narcotráfico y el micro tráfico, y otras conductas criminales, las enfrentan el gobierno del cambio ofreciéndoles un sometimiento de desmonte de estas estructuras del delito o de lo contrario el accionar contundente del Estado con la fuerza pública a la cabeza, no les debe dar tregua a estas organizaciones del delito que azotan la cotidianidad de la ciudadanía.

Sólo la negociación política con las guerrillas, y el sometimiento de las organizaciones del multictipen; con el accionar permanente de la fuerza pública, una eficaz administración de justicia, con el compromiso del Congreso de la República y la presencia activa de la sociedad civil, se lograría el proyecto colectivo de nación que transite por un cambio democrático de transición en función de las mayorías nacionales, la propuesta de la paz total se constituye

en el reto integral para el logro de la paz y la reconciliación que es asumido por el gobierno del cambio con la obligación contemplada en el artículo 22 de la Constitución, que señala que la paz es de obligatorio cumplimiento, siendo una de sus principales tareas.

El gobierno del cambio, destina la mayoría de los recursos de la reforma tributaria aprobada por el Congreso, que por primera vez priorizo la inversión en los más necesitados, la renta básica, la entrega de tierras con una ambiciosa reforma agraria, la condonación de los créditos del Icetex, la gratuidad en la matrícula para la educación superior, y la posibilidad del logro de las reformas de la salud, laboral y pensional, le permitirán a Colombia transitar por los senderos del pago de la gran deuda social para con los que nunca han tendido gobierno y Estado, siendo la desigualdad y la falta de oportunidades, caldo de cultivos de la guerra que vive la nación, que tiene el sagrado derecho de salir de la horrible noche. Nos quedan tres años de gobierno de la potencia mundial de la vida, el presente y futuro es para adelante, manos a la obra.

Harold Ruiz

Foto tomada de: Caracol Radio